

Parte Denunciante: [REDACTED]

Parte Denunciada: Partido de Baja  
California.

## RESOLUCIÓN 17/2021

Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 7, 8, 33, 35; 36, fracción III, incisos a) y b); 45, fracción VI, 46, fracción XXIV; 57, fracción I; 354; 359 fracciones II y III; 364, 365, 366, 368; 370 y 371, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 34, numeral 1, inciso a) y 57, numeral 1, inciso I), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; 7, numeral 1, fracciones II y III; 14 numeral 1; 49, 50 y 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; determinamos la **existencia** de las infracciones consistentes en **afiliación indebida** y **uso indebido de datos personales**, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.

## GLOSARIO

<b>Comisión:</b>	Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California	<b>LGPE:</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<b>Consejo General:</b>	Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California	<b>LGPP:</b>	Ley General de Partidos Políticos
<b>Constitución federal:</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	<b>PBC:</b>	Partido de Baja California
<b>Constitución local:</b>	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California	<b>Reglamento de Quejas:</b>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
<b>INE:</b>	Instituto Nacional Electoral.	<b>Sala Regional:</b>	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara, Jalisco
<b>Instituto:</b>	Instituto Estatal Electoral de Baja California	<b>Sala Superior:</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<b>Ley Electoral:</b>	Ley Electoral del Estado de Baja California	<b>SCJN:</b>	Suprema Corte de Justicia de la Nación
<b>Ley de Partidos:</b>	Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California		

**Tribunal:** Tribunal de Justicia Electoral del  
Estado de Baja California

Baja California

**Unidad:** Unidad Técnica de lo Contencioso  
Electoral de la Secretaría Ejecutiva  
del Instituto Estatal Electoral de

**UMA**

Unidad de Medida y Actualización

## **ANTECEDENTES:**

**1. Denuncia.** Las denuncias objeto de la presente resolución fueron presentadas en este Instituto en contra del PBC por la presunta afiliación indebida y uso indebido de datos personales de [REDACTED] y [REDACTED], las cuales fueron remitidas en copia simple mediante oficio IEEBC/SE/2659/2021, suscrito por Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo de este Instituto.

**2. Radicación, admisión y emplazamiento.** Habiendo recibido las quejas en comento, se registraron bajo la clave IEEBC/UTCE/PSO/08/2021 y se acordó reservar su admisión y el emplazamiento correspondiente, hasta que esta autoridad se allegara de los elementos necesarios para mejor proveer, esto es, el original de los escritos de denuncia.

El trece de abril del año en curso se recibió el oficio IEEBC/SE/3213/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, por medio del cual remitió el oficio IEEBC/DPE/492/2021, suscrito por Iris Berenice Angelica Lozano Rivas, Titular Ejecutiva del Departamento de Procesos Electorales, a través del cual remitió original únicamente de los documentos correspondientes a [REDACTED], en cuanto a las partes denunciantes en el presente procedimiento sancionador ordinario.

Por otro lado, al advertir que los documentos de [REDACTED] constaban en copia simple, se le requirió para que, en un plazo no a mayor a tres días contados a partir de la notificación, ratificara la denuncia, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendría por no presentada su denuncia.

Aunado a lo anterior, el veinte de abril del año en curso, se notificó a [REDACTED] en el domicilio procesal señalado, por lo que dicho plazo feneció el veintitrés de abril sin que presentara escrito alguno, siendo certificado por la Titular de la Unidad, por lo que se tuvo por **no presentada** su denuncia, ya que no fue ratificada.

Posteriormente, el treinta de abril del año en curso, al cumplirse con los requisitos de procedencia se determinó la admisión de la denuncia presentada por [REDACTED] y el emplazamiento a la parte denunciada.





Cabe precisar que el PBC fue notificado del emplazamiento el cuatro de mayo de dos mil veintiuno<sup>1</sup> tal como se advierte en la cédula y razón de notificación.

**3. Investigación respecto de la existencia de los hechos denunciados.** Se llevó a cabo la diligencia de inspección a la página de internet del Instituto Nacional Electoral, con el fin de verificar la afiliación al partido denunciado lo que consta en el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC266/07-04-2021.

**4. Contestación.** La parte denunciada presentó el diez de mayo el oficio PBC/IEEBC/094/2021, mediante el cual dio contestación a la denuncia instaurada en su contra en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente antes mencionado, lo que se le tuvo por contestado mediante acuerdo de trece de mayo.

Cabe precisar que, en tal oficio de contestación, invoca y ratifica las garantías constitucionales de presunción de inocencia, no autoincriminación y de no declarar, por lo que no ofreció ni aportó pruebas que acrediten su defensa.

**5. Admisión y desahogo de pruebas.** En el acuerdo a que se hace referencia los puntos que anteceden, se admitieron las pruebas siguientes:

- a) Documental Pública: Consistente en el oficio de resultado de compulsas.
- b) Documental Pública: Consistente en el formato de desconocimiento de afiliación suscrito por la denunciante.
- c) Documental Privada: Consistente en el escrito de denuncia.
- d) Documental Privada: Consistente en la copia simple de la credencial para votar con fotografía de la denunciante.

Además, tales medios de prueba se tuvieron por desahogados por su propia y especial naturaleza y se reservó su valoración hasta el momento procesal oportuno.

**6. Alegatos.** Una vez desahogados los medios de prueba, se dio vista a las partes para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, presentaran por escrito en vía de alegatos lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 368, fracción IV de la Ley Electoral y 48 del Reglamento de Quejas y Denuncias; resultando que no se recibió escrito alguno de ninguna de las partes dentro de dicho plazo.

<sup>1</sup> La fecha corresponde al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.

Cabe señalar que, el partido de Baja California presentó escrito de alegatos el veintidós de junio del año en curso, siendo que fue notificado el diez de junio, por lo que se tuvo como presentado fuera del término de ley.

**7. Cierre de instrucción y remisión del proyecto de resolución.** Al no existir más diligencias por desahogar en el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, el dieciocho de junio se declaró el cierre de instrucción en términos de la fracción V del artículo 368 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, por lo que el siete de julio, la Unidad, a través del oficio IEEBC/UTCE/2900/2021, remitió a la Comisión de Quejas el proyecto de resolución que nos ocupa.

**9. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias.** El ocho de julio, la Comisión de Quejas de este Instituto, celebró sesión de dictaminación con el objeto de analizar la resolución que nos ocupa, sesión a la que asistieron por la Comisión, los Consejeros Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Olga Viridiana Maciel Sánchez y Daniel García García; la Secretaria Técnica Karla Giovanna Cuevas Escalante; asimismo asistió Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo de este Instituto, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Irving Emanuel Huicochea Ovelis, Francisco Javier Tenorio Andújar, Pedro Manuel Athie García, María Elena Camacho Soberanes y Alejandro Jaen Beltrán Gómez, representantes de los partidos políticos siguientes: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Morena, Redes Sociales Progresistas, Partido del Trabajo y Encuentro Solidario, respectivamente.

En el desahogo de la sesión y una vez que fue suficientemente discutido el proyecto de resolución, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, quienes determinaron aprobarlo por Unidad, así como remitir al Consejo General el proyecto de resolución para su estudio y votación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 370 de la Ley Electoral.

## **CONSIDERANDOS:**

### **PRIMERO. COMPETENCIA**

El Consejo General es competente para resolver el procedimiento sancionador ordinario cuyo proyecto le sea turnado por la Comisión de Quejas de este Instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 46, fracción XXIV, 359, fracción I, 364, 365, 370 y 371 de la Ley Electoral; 7 numeral 1, fracción I; 49; y, 52 del Reglamento de Quejas.





El objeto del presente procedimiento versa sobre hechos presuntamente violatorios de los artículos 6, apartado A, fracción II; 35, fracción III y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal; 5, apartado A, párrafo tercero; 7, Apartado C, fracción III; 8, fracciones I y IV, inciso e), de la Constitución local; 57, fracción I; 337, fracción I; 338, fracciones I y XII; 354, fracción I de la Ley Electoral; 2, apartado 1, b), 3, apartado 1; 5, párrafo 1; 25 apartado 1, a), e), y q), de la LGPP; 2, fracción II; 3, 23, fracciones I y VI y 24, fracción I de la Ley de Partidos, atribuibles al PBC, por la presunta afiliación indebida y uso no permitido de datos personales, en perjuicio de la denunciante.

En ese sentido, atento a que este Consejo General entre sus atribuciones cuenta con la de procurar que las actividades de los Partidos Políticos Locales se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, en términos de lo preceptuado en los artículos 1, 2 fracción V, 4, 5 fracción II, 46, fracciones XXIX de la Ley Electoral; 6, primer párrafo, es inconcuso que es competente para conocer y resolver lo conducente, respecto a la conducta presuntamente infractora, atribuida al denunciado, en su carácter de Partido Político Local y, en su caso, imponer la sanción que en Derecho corresponda.

## **SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. MEDIDAS SANITARIAS**

En apego a las medidas establecidas con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, se aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020, por el que se "AUTORIZA LA CELEBRACIÓN, A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DE SESIONES VIRTUALES O A DISTANCIA DEL CONSEJO GENERAL Y DE LOS DEMÁS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19".

En ese sentido, a efecto de regular el desarrollo y logística del uso de herramientas tecnológicas para la celebración de sesiones, es que el once de enero se aprobó el Dictamen treinta por el que se emitieron los "LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SESIONES VIRTUALES O A DISTANCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL Y DEMÁS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 30, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior.

## TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS

### A) HECHOS DENUNCIADOS

La parte denunciante señala que desconoce por completo cómo fue posible estar afiliada al partido de Baja California, ya que no lo solicitó; por lo que en ese sentido manifestó su voluntad de NO estar afiliada a ese partido, ya que indebidamente usaron su identidad.

Por lo anterior, realizó escrito de denuncia de treinta de marzo dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto.

### B) EXCEPCIONES Y DEFENSAS

El PBC al dar contestación al emplazamiento, hizo valer, en esencia, lo siguiente:

El diez de mayo del año en curso señaló en su oficio de contestación, que invoca y ratifica las garantías constitucionales de presunción de inocencia, no autoincriminación y de no declarar, por así convenir a sus intereses, por lo que no ofreció ni aportó pruebas que acrediten su defensa.

El veintidós de mayo presentó escrito en vía de alegatos fuera del término establecido, por lo que se tuvo por no presentado, dado que el plazo transcurrió del diez al diecisiete de junio del año en curso.

## CUARTO. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución federal, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin





la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; por tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución federal.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a las personas que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad

de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 24/2002 emitida por el Tribunal Electoral, de rubro: "DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES".<sup>2</sup>

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de las y los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada uno de ellos, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de las y los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación — para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles

<sup>2</sup> Consultable en la página: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=afiliaci%C3%B3n>





y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

Por datos personales se debe entender cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su nombre, domicilio, ideología y opinión política.

El uso de los datos personales abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales, por lo que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que *“el que afirma está obligado a probar”* misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano o ciudadana desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en la queja que dio lugar al procedimiento sancionador ordinario una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho. Máxime, que es acorde el criterio de la Sala Superior en la jurisprudencia 3/2019, de rubro: "DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO".<sup>3</sup>

Por tanto, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

## QUINTO. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN

En el presente considerando se analizarán los medios de prueba obrantes en el procedimiento que nos ocupa, como sigue:

### a) Aportadas por la parte denunciante

1. Oficio de resultado de compulsas de la clave de elector con las bases de datos de representante de partido político ante mesa directiva de casilla y con la de afiliados o militantes de partido político.
2. Formato de desconocimiento de afiliación.
3. Escrito de denuncia.
4. Copia de credencial para votar de la denunciante.

<sup>3</sup> Consultable en el sitio web: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2019&tpoBusqueda=S&sWord=3/2019>





**b) Aportadas por la parte denunciada**

El partido denunciado señaló en el oficio de contestación, que invoca y ratifica las garantías constitucionales de presunción de inocencia, de no autoincriminación y de no declarar, por así convenir a sus intereses, por lo que no ofreció ni aportó pruebas que acrediten su defensa. En ese sentido, se observa que ha precluido su derecho.

**c) De la investigación**

**1. Acta Circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC266/07-04-2021 con motivo de la diligencia de investigación consistente en ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral ordenada en el punto quinto del acuerdo de primero de abril del dos mil veintiuno dictado dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente IEEBC/UTCE/PSO/08/2021.<sup>4</sup>**

- 1. Ingresé a la página <https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/>. Observé en la parte superior izquierda el siguiente texto: "Fecha de última actualización: 09 de Enero de 2021", más abajo, al centro, en un fondo color rosa, un texto con letras blancas que dice "Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y Locales", seguido de esto se encuentra el texto: "¿Cómo ejercer los derechos ARCO y ante quién? – Acceso. - Podrás ejercer este derecho ante la autoridad electoral o ante los partidos políticos. - Si deseas conocer los padrones de afiliados verificados por la autoridad electoral en 2017, podrás solicitar dicha información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. - Consulta los padrones de afiliados actualizados de los Partidos Políticos: Nacionales. – Locales...". Lo anterior se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.*



<sup>4</sup> Solo se inserta lo referente a la denunciante \*\*\*\*\* al no haber sido ratificada la denuncia por \*\*\*\*\* , por lo que no es parte del presente procedimiento.

## ¿Cómo ejercer los derechos ARCO y ante quién?

### Acceso

Podrás ejercer este derecho ante la autoridad electoral o ante los partidos políticos.

Si deseas conocer los padrones de afiliados verificados por la autoridad electoral en 2017, podrás solicitar dicha información a través de la [consulta técnica de información](#).

Consulta los padrones de afiliados actualizados de los Partidos Políticos:

- [Nacionales](#)
- [Locales](#)

### Rectificación

Es un cambio o corrección en alguno de tus datos personales que están en el padrón del partido político. Solicítala ante el partido en donde te encuentras afiliado.

### CANCELACIÓN

Equivale a darte de baja del padrón de militantes y afiliados del partido político. Solicítala ante el partido político en el cual estás afiliado.

En caso de ser procedente la cancelación, el partido político deberá actualizar el padrón de afiliados para que tus datos no aparezcan publicados.

### Oposición

En caso de que requieras que tus datos personales no aparezcan publicados en el Padrón de Afiliados del Partido Político, por considerar que podrías causar un daño o perjuicio, aun cuando el tratamiento sea exacto, avisa ante el partido político a presentar una solicitud de oposición. Esto se sigue a una [cancelación](#).

### Affiliación indebida

Si estás afiliado de manera indebida en algún Partido Político Nacional, en tu derecho presentar una queja ante la Unidad Técnica de la Contención Electoral del INE, o bien ante la Junta Local o Distrital más cercana a tu domicilio. Podrás hacerlo a través del siguiente [formulario](#).

Por lo que procedí a dar clic en la opción "Locales", donde se desplego una segunda pestaña en el navegador con el siguiente hipervínculo <https://deppp-partidos.ine.mx/afiliadosPartidos/app/publico/consultaAfiliados/locales?execution=e1s1#form:pnDetalleAfiliado> y observé que en la parte central de la página web aparece la leyenda "Padrón de militantes de partidos políticos del Estado" y en el primer recuadro se lee el siguiente texto: "Datos del afiliado.- Información actualizada al instante.- Para saber si estás afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector.- Clave de Elector.- Conoce tu clave de elector. CONSULTAR". Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla para que obre en el cuerpo de la presente acta.

deppp-partidos.ine.mx/afiliadosPartidos/app/publico/consultaAfiliados/locales?execution=e1s1#form:pnDetalleAfiliado

Instituto Nacional Electoral

## PADRONES DE MILITANTES DE PARTIDOS POLITICOS LOCALES

### Datos del afiliado

Para saber si estás afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector.

Clave de elector

Consultar

Conoce tu clave de elector

### Selecciona el Partido Político a buscar

BÚSQUEDA POR PARTIDO POLITICO Y GEOGRÁFICO

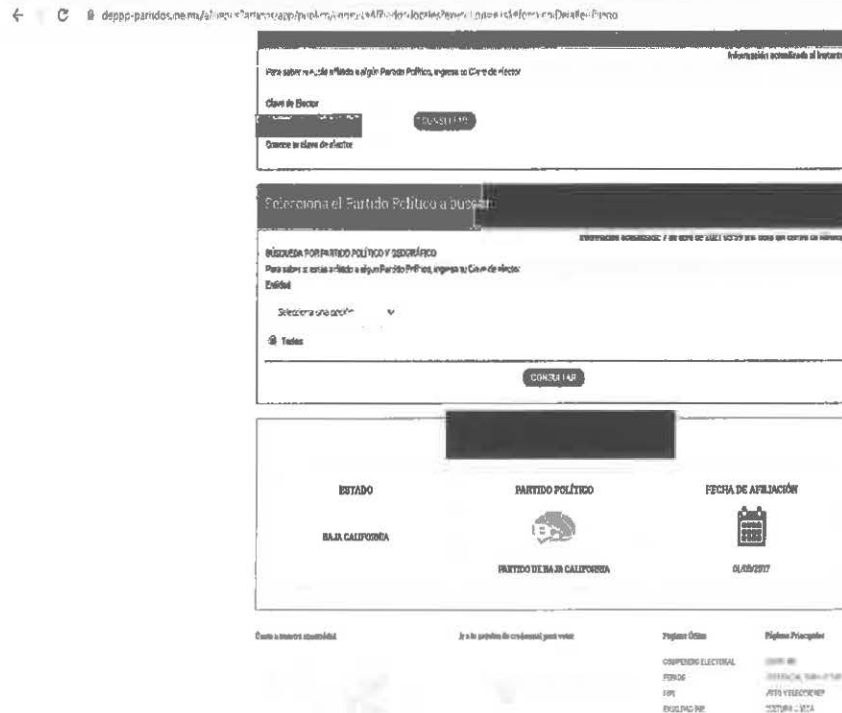
Para saber si estás afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector

Entidad

Selecciona una opción



Posteriormente ingresé la Clave de elector [REDACTED] la cual fue proporcionada por la denunciante y da como resultado lo siguiente: [REDACTED] - ESTADO. - BAJA CALIFORNIA. - PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA. - FECHA DE AFILIACIÓN. - 01/03/2017". Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla para que obre en el cuerpo de la presente acta.



depp-partidos-nema/guest/americaapp/votacion/ver/clave-de-electores/Default.aspx

Información actualizada al instante

Para saber si estás afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector

Clave de elector [REDACTED]

¿Quieres la clave de elector?

Selecciona el Partido Político a buscar:

INGRESAR POR PARTIDO POLÍTICO Y ACRÓFONO

Para saber si estás afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector

Existencia

Selecciona una opción

Todos

CONSEJAR

ESTADO

BAJA CALIFORNIA

PARTIDO POLÍTICO

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

FECHA DE AFILIACIÓN

01/03/2017

Quiero a mejorar mi identidad

Ir a la página de credenciales para votar

Programa Otros

COMPENDIO ELECTORAL

ESTADOS

PRE

EXCUSADO PRE

Programa Principales

CONSEJO

CONSEJO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

#### d) Valoración Individual

Las pruebas existentes en autos, serán valoradas conforme las reglas previstas en los artículos 363 TER de la Ley Electoral, de la siguiente manera:

- **Documentales privadas**, merecen valor indiciario, por lo que solo harán prueba plena cuando a juicio del juzgador, los elementos que obran en el expediente los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la verdad de los hechos afirmados.
- **Documentales públicas**, al haber sido expedidas por funcionariado en ejercicio de sus atribuciones merecen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia electoral, tal y como se advierte en la jurisprudencia 19/2008, de la Sala Superior, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL", de la que se desprende, en lo que interesa, que las pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los hechos controvertidos.

En ese tenor se analizan las pruebas obrantes en el presente procedimiento de la manera siguiente:

Prueba	Valor probatorio
Documental pública consistente en oficio de resultado de compulsas de la clave de elector con las bases de datos de representante de partido político ante mesa directiva de casilla y con las de afiliados o militantes de partido políticos.	Merece valor probatorio pleno, ya que es expedida por autoridad electoral.
Documental privada consistente en formato de desconocimiento de afiliación de treinta de marzo, suscrito por [REDACTED]	Hace prueba plena porque consiste en la libre manifestación de la ciudadana en desconocer su afiliación al Partido de Baja California, debido a que corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón.
Documental privada: consistente en escrito de denuncia de treinta de marzo del año en curso, signado por [REDACTED]	Hace prueba plena porque consiste en la libre manifestación de la ciudadana en negar su consentimiento para su afiliación al Partido de Baja California, debido a que corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón.
Documental privada: consistente en la copia simple de credencial para votar de la denunciante.	Hace prueba plena de la identidad de quien suscribe la queja que nos ocupa en el presente procedimiento.





Prueba	Valor probatorio
Documental pública consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC266/07-04-2021, con motivo de la diligencia de investigación, por lo que se ingresó a la página del INE <a href="https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/">https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/</a> , para verificar los hechos denunciados respecto a la existencia de la presunta afiliación.	Merece valor probatorio pleno, al haber sido expedida por funcionariado en ejercicio de sus atribuciones.

## SEXTO. ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS

A consideración de esta autoridad, en el caso que nos ocupa el PBC incurrió en la infracción consistente en la **indebida afiliación** de [REDACTED] conforme a los razonamientos que a continuación se exponen:

Como se adelantó, el derecho de afiliación en materia política-electoral es un derecho fundamental que requiere, necesariamente y en todos los casos, la manifestación y consentimiento libre, voluntario y previo de la o el ciudadano que se incorpora o se suma en calidad de militante o afiliado a un partido o agrupación política.

En consonancia con lo anterior, la normativa interna del PBC<sup>5</sup>, prevé procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos, obligaciones y el mandato expreso que dicha afiliación siempre se realice de manera personal, pacífica, libre e individual.

Con base en lo anterior, es claro que el PBC tiene un mecanismo concreto de afiliación, consistente en la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, así como la

### <sup>5</sup> ESTATUTOS DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

**ARTICULO 7.** - Podrán ser militantes del Partido de Baja California los ciudadanos mexicanos que, en pleno goce de sus derechos político-electorales, suscriba de forma individual, libre, voluntaria y pacífica, protesten cumplir con la participación permanente y disciplinaria en la realización de los objetivos del partido, suscribir la aceptación de los principios, estatutos y plan de acción, así como acatar las obligaciones y las resoluciones de los órganos del partido.

La solicitud de afiliación individual al partido se formulará ante los comités municipales que corresponda, los cuales deberán remitir de inmediato a la Secretaría de Acción Política, Formación y Capacitación Cívica del Comité Ejecutivo Estatal.

presentación de documentos en los que conste esa manifestación, así como los datos de la o el ciudadano que pretenda afiliarse.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin.

Tal aseveración encuentra sustento en el artículo 368, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como en la jurisprudencia 3/2019 de la Sala Superior, de rubro: "DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO".<sup>6</sup>

En el presente caso, como se demostró, la denunciante aparece registrada en el padrón de afiliados del PBC, lo cual se consultó en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado de Consulta los padrones de afiliados actualizados de los Partidos Políticos: Nacionales. – Locales; sin embargo manifestó que no otorgó su consentimiento para ello.

De tal manera que, ante la denuncia que dio origen al presente procedimiento, esta autoridad emplazó al denunciado para que desvirtuara los hechos denunciados en su contra y se le dio vista para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin embargo, en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio manifestado por el quejoso, ni ofreció o aportó prueba alguna que resultara idónea o suficiente para eximirlo de responsabilidad.

Esto es, el PBC no demostró que la afiliación de [REDACTED] se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha ciudadana hubiera dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, de ahí lo fundado del presente procedimiento.

A mayor abundamiento, ante los hechos probados en el sentido de que la quejosa aparece afiliada al PBC en su padrón de militantes; tal instituto político debió demostrar con documentación soporte o pruebas idóneas, que acreditaran que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, lo que no aconteció en el presente caso, por lo que se actualiza una violación al derecho humano de libre afiliación política-electoral y por

<sup>6</sup> Consultable en el sitio web: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2019&tpoBusqueda=S&sWord=3/2019>





tal, una transgresión a la garantía de la hoy quejosa por parte del PBC, por utilizar indebidamente sus datos personales para ese fin.

Esto se considera así, ya que resulta lógico concluir que no es posible determinar la existencia de una afiliación de forma indebida atribuida a un partido político, sin que obligadamente también se concluya, por efecto residual, que existió un uso indebido de sus datos personales, porque es a partir de su utilización, como pudo concretarse el registro de la hoy quejosa como militante del PBC; lo cual, como se mencionó, está debidamente probado en la presente causa, si se toma en consideración que el PBC utilizó los datos de la denunciante, como lo es su nombre y clave de elector, en términos de lo asentado en el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC266/07-04-2021.

Por tanto, queda claro que, con la indebida afiliación, no sólo se afectó el bien jurídico de la libertad de afiliación, sino también se afectó el correlativo a la protección y uso adecuado de los datos personales de todo ciudadano mexicano.

No se ignora que, el PBC en su defensa, invoca el principio de presunción de inocencia, y derecho de no autoincriminación, previstos en el artículo 20, inciso b), fracciones I y II, de la Constitución federal.

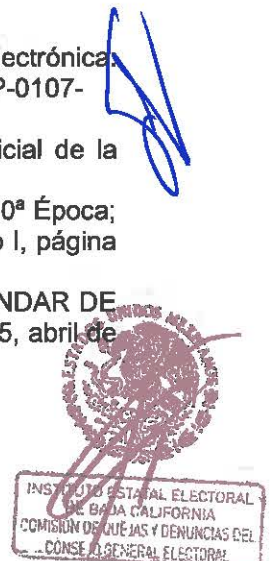
Dado lo anterior, de acuerdo a lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017<sup>7</sup>, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su tesis de jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,<sup>8</sup> el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria<sup>9</sup> y como estándar probatorio<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: [http://www.te.gob.mx/informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf](http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf)

<sup>8</sup> Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

<sup>9</sup> Tesis de Jurisprudencia: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

<sup>10</sup> Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.



En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la SCJN<sup>11</sup> ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

*Mutatis mutandis*, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por la denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, **será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho**, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera

<sup>11</sup> Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.





insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

No obstante, lo expuesto por el partido político se considera insuficiente y no apto para eximirlo de responsabilidad, ya que, si bien es cierto el principio de presunción de inocencia, implica que hasta en tanto no se acredite la infracción y la responsabilidad del sujeto, debe presumirse su inocencia, también lo es que, debido a que la quejosa apareció en la página de afiliados a partidos políticos locales y toda vez que el PBC no

presentó el expediente en el que pudieran obrar las constancias del procedimiento de afiliación de la quejosa u otra prueba alguna, no pueden tenerse por demostradas las manifestaciones en su defensa.

Asimismo, está descartada la posibilidad de tratarse de un caso de homonimia, ya que de la prueba ofrecida por la quejosa (copia simple de credencial de elector) se desprende claramente que se trata de la misma ciudadana al coincidir la clave de elector.

En ese sentido, habiéndose recabado las pruebas que demuestran que el PBC afilió a la denunciante, el mencionado partido se encontraba compelido a aportar los medios de prueba (que debían estar en su poder) para demostrar que la afiliación se realizó en forma correcta.

En virtud de lo anterior, el argumento de defensa aducido por el denunciado carece de soporte y, por ende, es insuficiente para eximirlo de responsabilidad respecto de las conductas que se le atribuyen.

Con base en lo expuesto, y pese a estar obligado a cumplir las normas constitucionales, legales y estatutarias de su partido, conforme lo ordenado en los artículos 35, fracción III, y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 5, párrafo 1 y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u), de la LGPP; 2, fracción II, 23, fracciones I y II de la Ley Local; 10, 338 fracciones I, de la Ley Electoral; 7, 8, 48 fracciones II y XI y 63 fracciones V y VI de los estatutos del PBC; el denunciado, sin mediar una explicación razonable y probada, afilió a la hoy quejosa a través del uso de sus datos personales, sin que existiese la voluntad libre e individual de ésta, sin tener soporte documental que hiciera patente la intención de integrarse o permanecer en sus filas.

Por las razones y fundamentos expuestos, se determina la **existencia de la infracción** consistente en la **afiliación indebida que deriva del uso indebido de los datos personales de [REDACTED]** atribuible al PBC.

## SÉPTIMO. RESPONSABILIDAD

Acreditada la infracción por parte del denunciado en su carácter de Partido Político, con los anteriores medios de convicción también se tiene por demostrada la responsabilidad por la afiliación indebida que deriva del uso indebido de los datos personales de [REDACTED]





De tal manera que, ante la denuncia que dio origen al presente procedimiento, esta autoridad emplazó al PBC para que desvirtuara los hechos denunciados en su contra y finalmente se le dio vista para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin embargo, en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio manifestado por la quejosa, ni ofreció o aportó prueba alguna que resultara idónea o suficiente para eximirlo de responsabilidad.

Con base en ello, ante la negativa de la parte denunciante de haberse afiliado al PBC correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Esto es, el PBC no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha persona hubiera dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PBC implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para realizar dicha afiliación.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación, sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de la quejosa, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1º de la Constitución federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

## OCTAVO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Con motivo de las consideraciones antes expuestas, lo procedente es determinar la sanción que legalmente corresponda al PBC por transgredir el derecho de la libertad de afiliación, así como su correlativo a la protección y uso adecuado de los datos personales de todo ciudadano mexicano, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II; 35, fracción III y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal; 5, apartado A, párrafo tercero; 7, Apartado C, fracción III; 8, fracciones I y IV, inciso e), de la Constitución local.

En ese sentido, en principio este órgano jurisdiccional debe tomar en consideración, entre otros aspectos, los siguientes<sup>12</sup>:

- La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.
- Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
- El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.
- Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

Lo anterior a efecto de calificar la falta como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley.

Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias<sup>13</sup>, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación.

<sup>12</sup> Criterio sustentado por la Sala Superior en la tesis XXVIII/2003, de rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", consultable en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo II, TEPJF, págs. 1682 y 1683.

<sup>13</sup> En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador **SUP-REP-45/2015** y acumulados, **SUP-REP-57/2015** y acumulados, **SUP-REP-94/2015** y acumulados, **SUP-REP-120/2015** y acumulados, **SUP-REP-134/2015** y acumulados, **SUP-REP-136/2015** y acumulados y **SUP-REP-221/2015**.





Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.

Adicionalmente, es menester precisar que, cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

El artículo 338 de la Ley Electoral, prevé como catálogo de sanciones que podrán imponerse a, entre otros, los partidos políticos que va desde una amonestación pública, hasta la suspensión del derecho a participar en los procesos electorales locales.

Para determinar la sanción, se atenderán a los parámetros establecidos en el artículo 356 de la Ley Electoral.

#### **Bien jurídico tutelado.**

Las normas que se violentaron en el presente asunto, corresponde a un derecho fundamental, el derecho de libre asociación en materia político-electoral, así como el derecho a la privacidad.

Las disposiciones legales que se estiman vulneradas tienden a preservar el derecho fundamental de la ciudadanía de decidir libremente si desea afiliarse o no a un partido político, así como a dejar de pertenecer al mismo, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país, además del correlativo derecho que tienen todos los ciudadanos para que todo ente público o sujeto, garantice y proteja la confidencialidad de sus datos personales, a fin de ser utilizados sólo bajo las condiciones y presupuestos consentidas.



## Circunstancias de modo, tiempo y lugar

Modo	Tiempo	Lugar
La conducta consistió en la afiliación de una ciudadana al PBC, sin su consentimiento.	La afiliación indebida se llevó a cabo el primero de marzo de dos mil diecisiete, conforme a lo expuesto en la presente resolución.	La conducta se realizó en el Estado de Baja California.

## Singularidad o pluralidad de la falta.

Conforme a lo expuesto, está acreditada la violación a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 35, fracción III y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal; 5, apartado A, párrafo tercero; 7, Apartado C, fracción III; 8, fracciones I y IV, inciso e), de la Constitución local; 57, fracción I; 337, fracción I; 338, fracciones I y XII; 354, fracción I de la Ley Electoral; 2, apartado 1, b), 3, apartado 1; 5, párrafo 1; 25 apartado 1, a), e), y q), de la LGPP; 2, fracción II; 3, 23, fracciones I y VI y 24, fracción I de la Ley de Partidos; por parte del PBC, no obstante lo anterior, a consideración de esta autoridad, ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas.

Esto es así, porque en el particular, lo que está acreditado es que el PBC afilió de manera indebida a la quejosa involucrada, en tanto que, el uso indebido de los datos personales sin la voluntad libre e individual de ésta para formar parte de los militantes de ese instituto político, no implica una infracción distinta, dado que, como se ha explicado, ese uso indebido está subsumido en esa indebida afiliación, razón por la cual, se arriba a la conclusión que, se trata de una sola infracción.

## Contexto fáctico y medios de ejecución.

La conducta desplegada por el denunciado se cometió a través de su padrón de militantes, pues en el mismo fue incluido la quejosa, usando sus datos personales, sin que ésta hubiese prestado su consentimiento libre y expreso.

## Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por el monto





de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece.

### **Intencionalidad.**

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del denunciado, por lo siguiente:

El PBC es un partido político local y, por tanto, tiene el estatus constitucional de entidad de interés público, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución federal y 5, Apartado A, de la Constitución local.

Los partidos políticos como el PBC, son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El PBC, como todos y cada uno de los órganos del poder público, está vinculado al orden jurídico local, nacional e internacional y está obligado a regir sus actividades de acuerdo con los principios del Estado democrático de derecho, de acuerdo con el precitado artículo 41, de la Constitución Federal, en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP en relación con el artículo 23, fracción VIII, de la Ley de Partidos.

El derecho de asociación a un partido político, en su vertiente de afiliación política-electoral, es un derecho fundamental cuyo libre ejercicio requiere e implica de la manifestación libre, personal y directa de cada ciudadano, en términos de la fracción III del artículo 35 de la Constitución federal.

El PBC, como todo partido político, es un espacio y conducto para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, como es el de libre afiliación. En este sentido, el ejercicio de este derecho no solo no se limita, sino que se ensancha y amplía al interior del partido político.

En consecuencia, el derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el responsable principal para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el genuino y auténtico ejercicio de ese derecho humano de

lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, corresponde al partido político involucrado demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.

La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, a través del uso de los datos personales, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.

Asimismo, es importante destacar que el PBC fue el único responsable de capturar la relación de los ciudadanos afiliados a su partido dentro del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos (lineamiento aprobado INE/CG851/2016), donde aparece registrada [REDACTED] como afiliada o militante de ese partido político. Por lo que, el PBC tenía plena conciencia de sus actos, sabía y conocía la acción que estaba realizando y a pesar de ello, optó por negarlo y guardar silencio, por lo que la presunción de inocencia se ve desvirtuada con este hecho.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- ✓ La quejosa aduce que desconoce la afiliación al PBC.
- ✓ Quedó acreditado que la quejosa aparece en el padrón de militantes del PBC desde el primero de marzo de dos mil diecisiete al siete de abril del año en curso, fecha en que fue realizada la verificación correspondiente constante en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC266/07-04-2021.
- ✓ El PBC no probó que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado de manera libre y voluntaria.
- ✓ El PBC no probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever.
- ✓ El PBC no ofreció argumento razonable ni elemento de prueba que sirviera de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo, ya que constituye una acción positiva.





### Calificación de la conducta

En atención a que se acreditó la infracción consistente en la afiliación indebida de [REDACTED] sin su consentimiento por parte del PBC, vulnerando el derecho fundamental a la libre afiliación a los partidos políticos, resulta congruente calificar la falta en que incurrió dicho instituto político como de **gravedad ordinaria**, por lo siguiente:

- La infracción es de tipo constitucional y legal, e implica también la inobservancia a su normativa interna.
- El bien jurídico tutelado que se violó fue el de preservar el derecho fundamental de los ciudadanos de decidir libremente si desean afiliarse o no a un partido político, el cual se erige como un derecho humano que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.
- Se trató de una conducta dolosa, puesto que el partido político denunciado en ningún momento justificó las razones que lo llevaron a afiliarse a la quejosa sin su consentimiento.

### Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal, a través de la tesis de jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.<sup>14</sup>

### **Condiciones socioeconómicas del infractor**

Es un hecho notorio para esta autoridad que el trece de octubre de dos mil veinte, en la décima octava sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, se aprobó el dictamen número treinta y seis de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento<sup>15</sup>, del cual se desprende que el monto anual de financiamiento público que recibirá el PBC durante el ejercicio 2021 para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, será por la cantidad de \$18'752,011.96 M.N. (Dieciocho millones setecientos cincuenta y dos mil once pesos con noventa y seis centavos, moneda nacional)<sup>16</sup>.

### **Sanción a imponer**

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley Electoral Local confiere a la autoridad electoral arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que **se** pueden imponer al PBC, por tratarse de un Partido Político Local, se encuentran especificadas en el artículo 354 fracción i, de la Ley Electoral.

Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de

<sup>14</sup> Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

<sup>15</sup> DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL EJERCICIO 2021

<sup>16</sup> Tesis: XX.2o. J/24 de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".





modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El artículo 354, fracción I de la Ley Electoral, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas:

- a) amonestación pública;
- b) multa de cincuenta a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente.
- c) reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda;
- d) la suspensión total de la entrega de ministraciones del financiamiento público que les corresponda; y
- e) en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la Ley Electoral, con la suspensión o cancelación de su registro como partido político.

Cabe precisar que, el derecho sancionador electoral se identifica con las generalidades del derecho sancionador, habida cuenta que consiste en la imputación o atribuidad a una persona, de un hecho identificado y sancionado por las normas electorales.

Así, una de las facultades de la autoridad en el ámbito del derecho sancionador es la de reprimir conductas que vulneran el orden jurídico para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia electoral.

Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales, tales como:

- Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad de la infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así como las condiciones particulares del infractor.
- Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para individualizar la sanción el grado de participación de cada implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
- Eficacia, esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en peligro o, en su caso,

lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado constitucional democrático de Derecho.

- Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención general, para disuadir la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la materia electoral.<sup>17</sup>

Lo anterior, es congruente con la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la SCJN, de rubro: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INculpADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.<sup>18</sup>

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la falta acreditada, se determina que el PBC debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, y que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro, y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 354, fracción I, inciso a), de la Ley Electoral, consistente en la amonestación pública, sería insuficiente; las indicadas en los incisos c), d) y e) de los preceptos señalados serían desproporcionadas con la gravedad de la infracción, mientras que la prevista en el inciso f) no aplica al caso concreto.

Por consiguiente, esta autoridad electoral estima que la sanción a imponer, en congruencia con la gravedad de la infracción acreditada y las circunstancias particulares del caso, **es la multa prevista en el artículo 354, fracción I, inciso b) de la Ley Electoral.**

Ahora bien, debe considerarse que, conforme al texto del artículo 354, fracción I, inciso b) de la Ley Electoral, respecto de los partidos políticos, el monto mínimo y máximo que se les puede imponer como multa, es de cincuenta a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente.

<sup>17</sup> Criterio sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento SRE-PSC-26/2017.

<sup>18</sup> Tesis: 1a./J. 157/2005, con registro: 176280, ubicada en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, enero de dos mil seis, Novena Época.





De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003, emitida por el Tribunal, de rubro: "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."<sup>19</sup>

Por otra parte, es menester precisar que, mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución federal, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica se entenderán referidas a la UMA.

De conformidad con lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó en el Diario Oficial de la Federación<sup>20</sup>, el valor diario de la UMA para el dos mil diecisiete, -año en que ocurrió la afiliación - fue de \$75.49 (Setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional).

En ese sentido, se considera imponer al PBC la sanción ejemplar consistente en **trescientos cincuenta (350)** veces el valor de la UMA vigente en la fecha en que se realizó el hecho denunciado:

<sup>19</sup> Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/USE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

<sup>20</sup> Visible en [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5468844&fecha=10/01/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468844&fecha=10/01/2017)



En este caso la ciudadana fue afiliada en dos mil diecisiete, por lo que la sanción se aplica de forma directa, conforme al valor de la UMA en ese año.

Por tanto, si en el presente asunto se ha demostrado la indebida afiliación al PBC de una ciudadana, se considera que lo procedente conforme a derecho es imponer a dicho partido político la siguiente multa:

Fecha de Afiliación	Monto de la UMA	Sanción a imponer
01/03/2017	\$ 75.49	\$26,421.50

Por lo que, del financiamiento público que le corresponde de manera mensual, siendo la cantidad **\$1'562,667.66 M.N.** (Un millón quinientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos con sesenta y seis centavos, moneda nacional), se considera como la sanción aplicable lo siguiente:

IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021	IMPORTE DE LA SANCIÓN QUE SE IMPONE	IMPORTE NETO QUE CORRESPONDERÁ COMO MINISTRACIÓN CON MOTIVO DE LA MULTA PARA EL MES DE MAYO 2021
<b>\$1'562,667.66</b>	<b>\$26,421.50</b>	<b>\$1'536,246.16</b>

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a sus actividades ordinarias, dado que representa el siguiente porcentaje:

Monto de la sanción	% de la ministración mensual
\$26,421.50	% 1.69

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia del SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.





Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 10/2018, del Tribunal, de rubro "MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN"<sup>21</sup>

La sanción impuesta al PBC será deducida de su financiamiento público cuando la resolución haya causado estado. El citado monto será destinado al COCITBC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 8, de la LGIPE.

#### **NOVENO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LA CIUDADANA QUEJOSA COMO MILITANTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA**

En virtud de que ha quedado acreditado que [REDACTED] fue afiliada al PBC sin su consentimiento, y que de las constancias que obran en el presente procedimiento quedó comprobado que se encuentra registrada en el padrón de afiliados de dicho instituto político, lo procedente es ordenar al PBC para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución, en caso de no haberlo hecho, inicie el trámite o procedimiento interno respectivo a fin de cancelar el registro de la quejosa como militante y una vez efectuado lo anterior, de inmediato lo informe a la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento de este Instituto, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia.

#### **DÉCIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA**

En términos del considerando **octavo** de esta resolución, se impone al PBC como sanción una multa que asciende a un total de \$26,421.50M.N. (veintiséis mil, cuatrocientos veintiún pesos con cincuenta centavos moneda nacional).

1. En términos de lo razonado en el considerando **octavo** de esta determinación y de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 8, de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al PBC será destinada al COCITBC a partir de que esta resolución haya causado estado.

<sup>21</sup> Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

2. Se instruye al Secretario Ejecutivo deducir el monto de la multa de la ministración mensual del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político y destinarlo al COCITBC.

### UNDÉCIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de inconformidad previsto en el precepto 283 de la Ley Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

### RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.** Se determina la **existencia** de la infracción consistente a la afiliación indebida de [REDACTED] al Partido de Baja California.

**SEGUNDO.** Se impone como **sanción al Partido de Baja California**, la **multa** prevista en el artículo 354, fracción I, inciso b) de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

**TERCERO.** Notifíquese personalmente a las partes de la presente resolución como en Derecho corresponda, con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral.

**CUARTO.** Se **ordena** al Partido de Baja California la **cancelación** del registro de [REDACTED] como militante o afiliada a dicho partido, en términos del considerando **noveno** de la presente resolución.

**QUINTO.** Publíquese la presente resolución en términos de la normatividad aplicable.

**SEXTO.** En términos del considerando **undécimo**, la presente resolución es impugnabile a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral.

**SÉPTIMO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique al Instituto Nacional Electoral la presente resolución una vez que haya causado estado.

**OCTAVO.** En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y definitivamente concluido.





El presente proyecto de acuerdo se sometió a votación de las personas que integran la Comisión, quienes determinaron **aprobarlo** por **unanimidad** de votos.

**DADO** en sesión virtual de la Comisión, a ocho de julio de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

*"Por la Autonomía e Independencia  
de los Organismos Electorales"*

**LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

  
**LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA**  
PRESIDENTA

  
**OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ**  
VOCAL



  
**DANIEL GARCÍA GARCÍA**  
VOCAL

  
**KARLA GIOVANNA CUEVAS ESCALANTE**  
SECRETARIA TÉCNICA

La Información testada por tratarse de información confidencial con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II y artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 apartado C, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 16 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Datos personales testados: Nombre completo y clave de elector.

